

La cuestión alimentaria y las infancias vulnerables
en tiempos de pandemia: estudio de caso
en Santiago del Estero.

Fernando Longhi, Romina Cordero,** Juan Lucas
Maldonado,*** Adrián Luna**** y Daniel Ise******

Introducción

La provincia de Santiago del Estero reúne características socioeconómicas excepcionales respecto a otras provincias del país. Se inserta en el Norte Grande argentino (el territorio más pobre del país) y sus niveles de desarrollo económico han sido marginales aun dentro de esta región, lo que la convierte en una de las provincias más pobres de la Argentina. A estas características se agrega el problema respecto de la magnitud que alcanza la inseguridad alimentaria y sus implicancias en términos de bienestar en la población infantil, condición agravada por la crisis derivada de la pandemia por COVID-19. En efecto, según estadísticas publicadas por el INDEC (2021), el aglomerado urbano de Santiago del Estero-La Banda (el cual contiene al 41% de la población provincial) presentaba el 50,2% de población pobre en 2021, la cual, respecto de los indicadores del año anterior, habría mostrado un incremento en 8 puntos porcentuales. Esto lo convertía en el cuarto aglomerado más pobre del país, solo detrás de Concordia (56,1%), Gran Resistencia (51,9%) y Gran Santa Fe (50,5%).

* Doctor en Ciencias Sociales (UNT). Investigador adjunto del Conicet con sede en el Instituto Superior de Estudios Sociales en San Miguel de Tucumán.

** Magíster en Ciencias Sociales (UNSE). Docente investigadora, Instituto de Lingüística, Folklore y Arqueología (UNSE).

*** Licenciado en Sociología (UNSE) y alumno de la Maestría en Ciencias Sociales (UNSE).

**** Técnico en Información Económica y Social (UNSE). Tesista de la Licenciatura en Sociología (UNSE).

***** Técnico en Información Económica y Social (UNSE). Tesista de la Licenciatura en Sociología (UNSE).

Por su parte, la indigencia (indicador de insatisfacción de requerimientos alimentarios mínimos) mostraba altas prevalencias también. Respecto de este indicador, el 6,1% de su población ingresaba en 2021 en esta categoría, destacando una posición de menor preocupación respecto de la pobreza, ya que 22 aglomerados urbanos del país (sobre un total de 33) mostraban una prevalencia aún mayor (INDEC, 2021)

Ambos problemas, pobreza e indigencia, configuran situaciones que condicionan la seguridad alimentaria del hogar. Es sobre este último atributo que esta propuesta busca contextualizar e indagar las características que asume el fenómeno en la provincia. Específicamente se buscó comprender de qué manera se expresa la inseguridad alimentaria infantil en el ámbito de hogares pobres cuyos niños asisten a comedores comunitarios. Como una forma de aproximarnos a la cotidianidad de los espacios de alimentación se realizaron entrevistas a referentes de diferentes espacios de alimentación y organizaciones sociales. Concretamente, se buscó conocer las percepciones sobre el impacto que tuvo la pandemia por COVID-19 en tres dimensiones: las actividades alimentarias, las actividades extraalimentarias y el consumo problemático de sustancias, las cuales permiten a su vez caracterizar con mayor precisión los atributos que asume la inseguridad alimentaria.

Así, a partir de un enfoque que combina métodos cuantitativos, cartográficos y cualitativos, se puso la mirada sobre un grupo de comedores comunitarios seleccionados a partir de dos atributos: su ubicación en contextos de inseguridad alimentaria y el conocimiento que los responsables tenían sobre la población asistida. Con este abordaje se pretende aportar conocimiento respecto de la relación entre pobreza y problemas alimentario-nutricionales en la niñez, relación que se profundizó en el contexto pandémico actual.

El capítulo se estructura a partir de los siguientes apartados: se analiza a continuación los vínculos entre inseguridad alimentaria y pobreza, poniendo el acento en los comedores comunitarios como agentes atenuadores de la inseguridad alimentaria a los que acuden los hogares pobres; sobre estas instituciones se analiza un arco temporal reciente indagando sobre los condicionantes que dieron lugar a su aparición en el contexto nacional y el posterior proceso de consolidación territorial que los caracterizó. Luego se realizan algunas precisiones metodológicas respecto de los indicadores utilizados, fuentes y tratamiento. Los resultados que se discuten luego examinan, desde un abordaje cartográfico, las relaciones espaciales entre pobreza, malnutrición infantil e inseguridad alimentaria, y la analizan en dos escalas geográficas: provincia y el aglomerado urbano

Santiago-La Banda. Asimismo, desde una mirada cualitativa y a partir de entrevistas a referentes en la gestión del comedor, se analizaron estrategias y adaptaciones del comedor en términos alimentarios, extraalimentarios y relacionados con el consumo problemático de sustancias. Se espera con esta propuesta generar insumos útiles para la formulación de políticas públicas en la pospandemia.

La seguridad alimentaria y sus vínculos con la pobreza

La seguridad alimentaria ha sido incluida como objetivo en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y constituye una condición para el logro del derecho a la alimentación.¹ En tal sentido, es ampliamente reconocido que el acceso a la alimentación suficiente en cantidad y calidad –y de manera socialmente aceptable– constituye un derecho básico para garantizar no solo el sostenimiento de la vida, sino también una vida saludable. Sin embargo, la disponibilidad y el acceso a los alimentos no serían condiciones suficientes para garantizar la seguridad alimentaria; resulta necesario también su utilización efectiva, entendida como la eficiencia del proceso nutricional en términos del estado nutricional (FAO, 2000; Aguirre, 2010).

Esta condición afecta de manera especial a la niñez, ya que la niña o el niño que no logra satisfacer sus necesidades nutricionales en los primeros años de vida a menudo ve afectado su crecimiento, su desarrollo madurativo y cognitivo, el rendimiento escolar y los procesos de integración social. En este contexto, la inseguridad alimentaria, que en sí misma representa una necesidad no satisfecha, vulnera a la vez el ejercicio de otros derechos, como educarse, jugar, participar de la vida cultural, entre otros (Salvia, Tuñón y Musante, 2012).

1. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha sido propuesta por las Naciones Unidas como un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de dicho organismo aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. En este contexto plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los grupos sociales más pobres y vulnerables.

Es reconocida también la relación existente entre inseguridad alimentaria y malnutrición infantil (Bergel Sanchís, Cesani y Oyhenart, 2017; Gámeren y Urbina Hinojosa, 2018; Luna Montaña, 2020). Existe claramente una relación directa entre ambos procesos, donde la inseguridad alimentaria es mayor, los problemas nutricionales infantiles – expresados como desnutrición, sobrepeso u obesidad– aumentan. Los determinantes de esta problemática se hallan tanto a nivel individual (características de consumo y hábitos saludables), a nivel del hogar (nivel de ingresos, hacinamiento, deposición de excretas, clima educativo) como a nivel macro relacionados con los niveles de desigualdad y las políticas sociosanitarias (Álvarez, 2012; Barrera-Dussan *et al.*, 2018; Longhi *et al.*, 2018).

Esta relación discurre de modo más profundo, acuciante y problemático en contextos de pobreza con acceso limitado a los sistemas de salud y saneamiento. Así, la pobreza, entendida como una medida multidimensional de carencia que compromete la seguridad alimentaria, resulta un importante condicionante del estado nutricional infantil (León *et al.*, 2004; Bolzán y Mercer, 2009). Al respecto, cabe destacar también la estrecha relación que existe entre pobreza extrema por ingresos e inseguridad alimentaria (Salvia, 2010; Tuñón, 2011; Fiszbein y Giovagnoli, 2004).

Para identificar la pobreza, los estudios fijan habitualmente la atención en las privaciones severas de bienes y servicios que una parte de la población sufre a causa de sus magros ingresos, no obstante, plantea Amartya Sen (1997) que confiar exclusivamente en la pobreza en términos de ingreso puede esconder aspectos cruciales de la privación económica. Sen (2000) centra su atención en las potencialidades de la gente y en las condiciones que restringen la libertad de tener lo que cada uno considera racionalmente que vale la pena ser y tener. Así, la condición de pobreza de una persona se corresponde con algún grado de privación que le impida el desarrollo pleno de sus capacidades, y en última instancia de su libertad. Este enfoque contribuye de manera significativa a “comprender mejor la naturaleza y causa de la pobreza y la privación, trasladando la atención principal de los medios (y de un determinado medio que suele ser objeto de atención exclusiva como el ingreso) a los fines que los individuos tienen razones para perseguir y, por lo tanto, a las libertades necesarias para satisfacer estos fines” (Sen, 2000: 117). La pobreza se manifiesta mediante algunas características generales de las familias de bajos recursos, como sus bajos niveles educacionales, insuficiencias nutricionales y una menor participación relativa en la actividad laboral, lo que se define a su vez por una pertenencia a ocupaciones de la más baja

productividad, que generan escasos ingresos y que impiden satisfacer integralmente sus necesidades más esenciales, materiales y no materiales. De este modo, el concepto de pobreza se encuentra atravesado por tres matices diferentes que exponen las múltiples dimensiones mencionadas: la idea de carencia de recursos, bienes y servicios, la idea de insatisfacción de aquellas necesidades que una sociedad o grupo social satisfacen en su globalidad y la idea de marginalidad o exclusión de aquellos recursos, bienes y servicios que puedan ser compartidos en una sociedad. En estos contextos de privaciones, la inseguridad alimentaria crece, se desarrolla y, en muchos casos, se consolida.

Algunos estudios han identificado que los factores asociados a la presencia de inseguridad alimentaria en los hogares pueden ser exógenos y/o endógenos. Entre los factores considerados exógenos, es decir aquellos que el hogar no puede controlar o influenciar directamente, se encuentran los sistemas y las estructuras ecológicas, económicas y socioculturales del país, región o comunidad, que forman la base contextual donde los factores sociales y de comportamiento se interrelacionan para determinar los patrones de consumo de alimentos, y el nivel de seguridad alimentaria del hogar (Dehollian, 1995).

Este complejo marco opera como condicionante de las características específicas del hogar y sus integrantes (variables endógenas) y determinará decisiones y comportamientos relacionados con la alimentación. Aspectos tales como el nivel socioeconómico, la composición y el tipo del hogar, la presencia y cantidad de menores de edad, así como también aspectos relacionados con la educación de la madre y ocupación de la persona de referencia del hogar, son algunos de los condicionantes más ampliamente reseñados (Bonfiglio, Salvia y Vera, 2020; Cordero y Cesani, 2021; Rosso *et al.*, 2015; Salvia, Tuñón y Musante, 2012; Bolzán y Mercer, 2009; Fiszbein y Giovagnoli, 2004).

En contextos territoriales de pobreza e inseguridad alimentaria, la contribución que comedores y merenderos sociales y comunitarios han realizado se convierte en una variable a considerar, ya que aporta a la comprensión del impacto sobre la seguridad alimentaria del hogar.

Se desarrolla a continuación un breve apartado sobre estas instituciones de oferta alimentaria extrafamiliar para luego analizar sus características en el contexto territorial de referencia.

Comedores infantiles en la Argentina

Diversas experiencias internacionales han sostenido como políticas alimentarias la presencia y conservación de comedores sociales y/o comunitarios, diferenciados de los comedores escolares, donde la asistencia pública estatal se vehiculiza a través de la escuela, por lo que cumplen una doble función como instituciones de enseñanza y de asistencia alimentaria.

En el caso de los comedores de gestión comunitaria, si bien se proponían combatir el hambre y la inseguridad alimentaria, algunas experiencias –como el caso mexicano– revelan su dependencia con estructuras de poder, organizadas bajo la lógica del clientelismo político (Casas Patiño *et al.*, 2021).

En la Argentina desde las primeras décadas del siglo xx se implementaron planes alimentarios centrados en las escuelas y las madres como figuras clave en la lucha contra la pobreza y el hambre y como actores favorecedores de la alimentación de niñas y niños y el éxito del sistema educativo. Sin embargo, la vitalidad de esas políticas de alimentación, así como la historia y dinámica de los comedores dan cuenta de diferentes momentos, por lo general vinculados a la sensibilidad de los gobiernos de turno frente a la problemática del hambre y a los ciclos económicos que condicionaban las acciones del Estado nacional. Entre estos momentos es posible identificar lo sucedido durante la última dictadura militar, cuando la seguridad alimentaria se vio afectada por las restricciones que sobrevinieron en el marco de las políticas económicas impulsadas entre 1976 y 1983. Con el inicio de la década de 1980, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, el Estado Nacional buscó contener la crisis de acceso a los alimentos aplicando políticas de alimentación como el Plan Alimentario Nacional (PAN), o el Programa de Promoción Social Nutricional (Prosonu). No obstante, luego de la crisis hiperinflacionaria de 1989 las acciones de descentralización del poder y la privatización de empresas públicas, tendientes a reducir el gasto social, afectaron considerablemente la implementación de los planes sociales. Y si bien la transferencia a los comedores escolares buscó optimizar la asignación de dinero para atender las necesidades de la población vulnerable, las irregularidades y falta de claridad en la utilización de los fondos generaron descontento en un importante sector de la población que comenzó a movilizarse.

Así cobraron protagonismo las organizaciones sociales y con el tiempo su presencia se fortaleció en el territorio. En 1989 tomó impulso el Bono Solidario, una tarjeta que podía ser cambiada por alimentos, que constituyó la primera experiencia de transferencia directa de dinero a

la población. Durante los años 90, y bajo esa lógica de transferencia nación-provincia, se combinaron dos programas, el ya mencionado Prosonu con el de Políticas Sociales Comunitarias, y así la responsabilidad sobre los comedores escolares recayó en la gestión municipal y en la provincial (Frei-Herrmann, 2020).

Como consecuencia del deterioro de los ingresos en importantes segmentos de la sociedad y de las múltiples irregularidades en la gestión de los fondos nacionales y provinciales surgieron acciones precarias y espontáneas, autogeneradas por los vecinos y en algunos casos con la participación de ONG, bajo el nombre de “ollas populares” o “comedores comunitarios”. Si bien buscaron contener los apremios alimentarios más urgentes, la cobertura y la capacidad de ofrecer alimentos fue limitada (Sordini, 2014). Estos espacios tenían una función transitoria, pero se consolidaron territorialmente a partir de los apoyos recibidos del Estado (Ierullo, 2013). Antes de esta etapa, los comedores eran pequeños, informales y aislados en cada comunidad, sin una red o asociación más grande. Pero la necesidad de la gente y el apoyo del gobierno propiciaron su expansión y pasaron a ser parte del territorio, adquirieron así un “formato organizativo permanente en gran parte de los barrios populares” (Frei-Herrmann, 2020).

Como se señaló, el surgimiento de comedores comunitarios en barrios pobres de nuestro país forma parte de un conjunto de acciones de asistencia alimentaria junto con la incorporación, de manera heterogénea y fluctuante, de las organizaciones de la sociedad civil, para la implementación y ejecución de programas y políticas sociales. Se trata de iniciativas configuradas como una suerte de respuesta para la satisfacción de necesidades alimentarias, surgidas en un contexto de asistencia social estatal.²

Superada la primera mitad de la década de 1990 se instaló un discurso emanado de instituciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el BID, a partir del cual se advertía sobre la ineficiencia de las políticas sociales de la Argentina. Esto se articuló con el condicionamiento de las

2. Santarsiero (2013) propone que los comedores suelen diferenciarse por tres aspectos: el político (dado que propician un espacio para la politicidad barrial vinculado con la política social territorializada), el social (porque refieren a lazos de solidaridad y de interacción cotidiana en el espacio comunitario, surgidos en las prestaciones y acciones de los comedores) y el alimentario (dado que procuran brindar alimentos y recursos en la cotidianidad del espacio barrial). Constituyen así un fenómeno político-social alimentario que en numerosas ocasiones está atravesado por la tensión que existe entre los sectores y actores populares vinculados al espacio barrial, y el Estado, ante la insuficiencia de la asistencia recibida de este.

instituciones internacionales para la entrega de préstamos destinados a cubrir necesidades alimentarias. Surgieron así las llamadas políticas focalizadas, direccionadas hacia grupos específicos de la sociedad. En el caso de los comedores, la focalización de las políticas significaba una nueva realidad, ya que la asignación de recursos y de dinero estaba dirigida a las comunidades con más demanda y pobreza (Frei-Herrmann, 2020).

Con el inicio del siglo XXI, y luego de la crisis económica de 2001, fue declarada la emergencia alimentaria y se sancionó la ley 25.724 conocida como Plan Nacional de Seguridad alimentaria (PNSA), el cual estaba orientado a las familias que vivían en situación socialmente desfavorable y con vulnerabilidad nutricional. A partir de entonces cobraron un mayor protagonismo las organizaciones sociales, el gobierno municipal y la comunidad, y se buscó fortalecer el rol de los comedores populares y centros comunitarios, para que la población dejara de ser solo beneficiaria y asumiera un rol de mayor protagonismo. La ayuda alimentaria llegaba a través de *tickets* o mediante la tarjeta social, con lo cual se suspendía la entrega directa de dinero a las personas y se pretendía alcanzar un distanciamiento de las prácticas clientelistas.³

Con la llegada de la pandemia por COVID-19 y las medidas de aislamiento con las que se procuró desacelerar la curva de contagios, la economía se vio profundamente afectada, lo que condicionó a que ciertos sectores de la población, históricamente vulnerables, buscaran asistencia en los comedores y merenderos barriales. Bajo una forma de contener esta demanda, desde el Ministerio de Desarrollo Social se compraron toneladas de alimentos para ser distribuidas en los comedores. Pero la compra con sobreprecios y las sospechas de corrupción terminaron por generar más cuestionamientos que apoyos en la opinión pública, aun cuando se trataba de acciones orientadas a fortalecer el sistema alimentario y expandir las políticas de alimentación existentes. Así, las acciones por minimizar el impacto de la pandemia y contener la pobreza pusieron a los comedores y organizaciones de la sociedad civil como actores fundamentales de la escena pública.

En este contexto, poco se ha estudiado sobre dicho impacto, características y los atributos que asumió la comensalidad en estos espacios de alimentación. La comensalidad no se limita, únicamente, a la cantidad y calidad de los alimentos, sino que también da cuenta de una forma especí-

3. Aun con los cambios en la aplicación del PNSA no se lograron transformaciones sustantivas, es decir, continuó primando una lógica de reparto de alimentos o transferencias para el sostenimiento de la modalidad de comedores (Demonte, 2016).

fica que adopta el comer (Aguirre, 2016), forma que habría sufrido nuevos cambios y transformaciones durante la pandemia. Menciona Patricia Aguirre que los niños que asisten a comedores sociales desconocerían la comensalidad familiar. Tal situación constituye un proceso de alimentación que supera la mera distribución de alimentos, y que por lo tanto es preciso reconocer otras dimensiones relacionadas con la enseñanza de valores, la transmisión de vínculos, la socialización, entre otros. Cuando la alimentación se satisface en un entorno extrafamiliar el fortalecimiento de esos vínculos, así como otras condiciones, se vería afectado.

Para esta autora, en los comedores sociales la alimentación busca mantener un cuerpo fuerte, por lo tanto, los alimentos serán elegidos con ese objetivo. En la Argentina se los denomina “alimentos rendidores” y se caracterizan por ser al mismo tiempo gustosos, como los azúcares; baratos, como los hidratos de carbono, y dar sensación de saciedad, como las grasas. Otra particularidad es que su comensalidad es colectiva, es decir se cocina y consume en grupo (guisos y sopas) todo lo que se pueda, “porque hay que disfrutar de la comida cuando hay, ya que no se sabe qué penas traerá el mañana” (Aguirre, 2010). Este proceso se articula sustancialmente con el marcado crecimiento de la obesidad, principalmente infantil, de mayor incremento en sectores pobres de la población. En efecto, la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud realizada en 2018 distinguía prevalencias de sobrepeso y obesidad infantil del 41% en la población de niños, niñas y adolescentes (NNYA) de entre 5 y 17 años.

A continuación, se analizan esas prevalencias, en un momento en el que los comedores comunitarios habrían tenido un rol fundamental para atenuar el impacto de la inseguridad alimentaria, y en una provincia cuyos niveles de pobreza previos a la pandemia ya eran elevados.

Métodos y fuentes en la medición de la pobreza y la caracterización de la inseguridad alimentaria

La propuesta se halla enmarcada dentro de una aproximación multimétodo (cuantitativa y cualitativa), buscando una complementación de estrategias y técnicas que nos permitan un abordaje que partía de considerar la complejidad del fenómeno. Es decir que el interés no solo estuvo en dar cuenta de la magnitud y distribución espacial de la inseguridad alimentaria, sino que también buscamos aportar a la comprensión de las características que asume en su manifestación familiar y comunitaria.

Nuestra propuesta abarca dos instancias: la primera, con un enfoque cartográfico, analiza la pobreza y el riesgo de inseguridad alimentaria en los radios censales de Santiago del Estero usando como fuente de información el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010.

Para la medición de la pobreza se utilizaron dos indicadores ampliamente consolidados: el método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) (Feres y Mancero, 2001), y el índice de pobreza crónica (Gasparini, Gluzmann y Tornarolli, 2019), ambos procesados a nivel de radio censal, y considerando tanto la provincia como el aglomerado urbano Santiago del Estero-La Banda. Asimismo, a partir de los aportes de Márquez y Salvia (2019) se analizó el riesgo de inseguridad alimentaria y se detectaron en ambas variables los puntos más críticos y las áreas de concentración.

Por otro lado, a partir de un relevamiento antropométrico realizado entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 por Isepci (2021), se detectó el estado nutricional en NNYA de 2 a 18 años asistentes a comedores comunitarios de la provincia. Este relevamiento, derivado del índice barrial de situación nutricional, incluyó, en el caso santiagueño, el análisis antropométrico de 2.166 NNYN distribuidos en diferentes comedores de la provincia, los cuales, analizados con los criterios propuestos por la segunda ENNYS 2 avalada por la OMS, permitieron calcular cuatro indicadores individuales (bajo peso para la edad, baja talla para la edad, sobrepeso y obesidad) y un indicador global de malnutrición (Isepci, 2021).⁴ Asimismo, bajo un enfoque con mirada territorial, se pudo conocer la distribución espacial de estas niñas y niños agrupados en 36 comedores comunitarios.

La segunda instancia supuso un trabajo a partir de métodos cualitativos, lo cual implicó el uso de una entrevista semiestructurada en profundidad a doce referentes comunitarios encargados de comedores y/o merenderos sociales con distinto tipo de gestión, ubicados en contextos de pobreza e inseguridad alimentaria de la provincia en estudio. El trabajo de entrevista se realizó por plataforma Meet y telefónicamente durante marzo y abril de 2021.

4. El indicador “bajo peso para la edad” considera puntajes z correspondientes con un valor menor a -2 desvíos estándar (DE) de los patrones de crecimiento de la OMS. Idéntico criterio persigue también el indicador de baja talla para la edad. Por el contrario, el sobrepeso identifica situaciones cuyo índice de masa corporal para la edad es mayor a 1 DE pero menor o igual a 2 DE. Finalmente, la obesidad ubica estadios cuyo índice de masa corporal para la edad supera los 2 DE. El indicador global de malnutrición es la sumatoria de una variable de déficit nutricional (bajo peso para la edad) y dos variables de exceso ponderal (sobrepeso y obesidad).

Se buscó aportar a la comprensión de tres dimensiones: actividades alimentarias, actividades extraalimentarias y consumo problemático de sustancias. Al enfocarnos en estos aspectos nos aproximamos a la cotidianidad de la vida familiar y comunitaria, así como a las circunstancias que tensionaron las relaciones entre vecinos, en una trama barrial atravesada por el impacto de la COVID-19.

Cartografías de la pobreza e inseguridad alimentaria en Santiago del Estero

La pobreza en Santiago del Estero adquiere un carácter estructural (Paz y Jara, 2012; Bolsi y Paolasso, 2009). Usualmente se ha estudiado su magnitud y tendencia, pero en pocas oportunidades se ha analizado su distribución espacial, aporte que pretende realizar este apartado.

Un método clásico de medición de la pobreza ha sido el de las NBI, que, más allá de sus limitaciones (Feres y Mancero, 2001), ha dado cuenta a nivel latinoamericano de carencias críticas y de la localización espacial de estas. Así, bajo esta propuesta se seleccionaron una serie de indicadores censales que permiten contrastar si los hogares satisfacen o no algunas de sus necesidades principales. Una vez realizado, se pueden construir “mapas de pobreza”, que ubican geográficamente las carencias. De esta manera, el NBI provee un método directo de “identificación” de los pobres tomando en cuenta aspectos que no se ven necesariamente reflejados en el nivel de ingreso de un hogar, aprovechando el potencial de desagregación geográfica que permite la información censal. El INDEC considera que un hogar es pobre por NBI si sufre al menos alguna de las siguientes carencias o privaciones:

- NBI 1: vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa departamento o rancho) o con materiales precarios (techos de caña, tabla, paja con barro o paja sola y/o pisos de ladrillos sueltos o tierra).
- NBI 2: viviendas que no disponen de baño o que, teniéndolo, no cuentan con inodoro con arrastre de agua.
- NBI 3: hogares donde habitan cuatro o más personas por cuarto habitable (hacinamiento crítico).
- NBI 4: hogares en los que alguna niña o niño en edad escolar primaria (6 a 12 años) no asiste a la escuela.

- NBI 5: hogares con cuatro o más personas por miembro ocupado y cuyo jefe posee primario incompleto o menos.

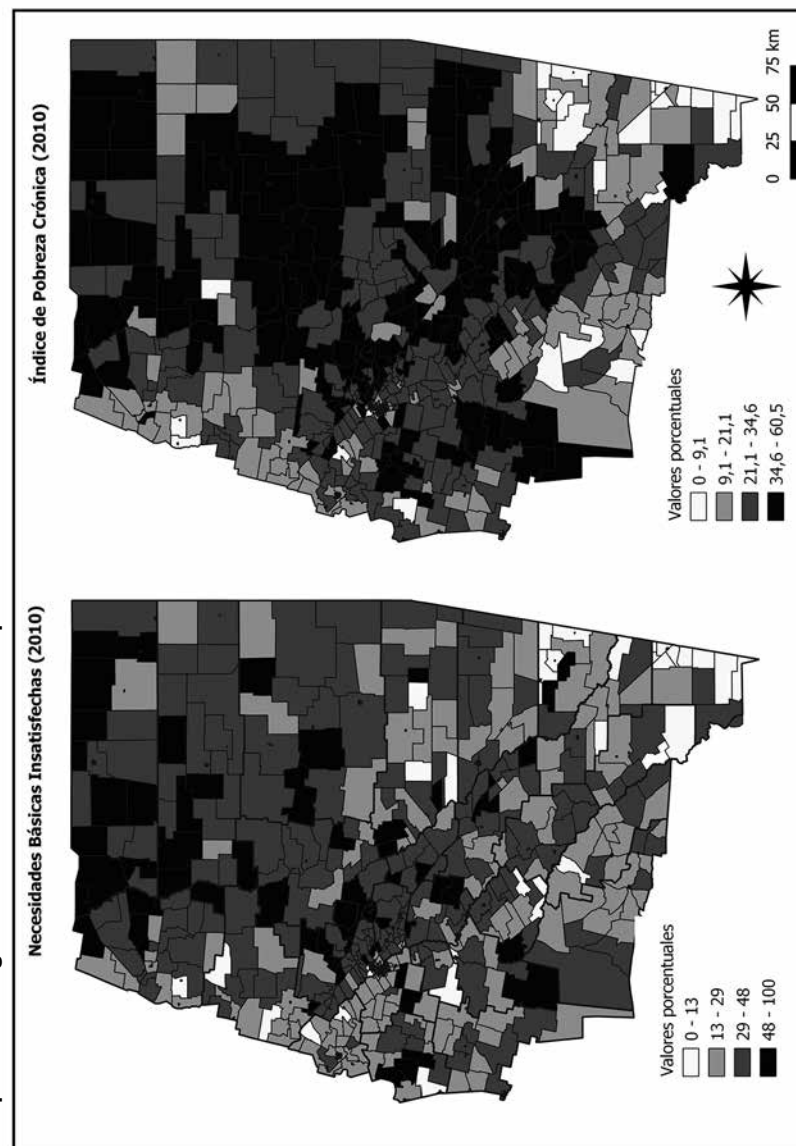
Bajo este enfoque, un hogar se considera pobre si no alcanza el umbral de satisfacción de al menos uno de los indicadores mencionados. El concepto en que se sustenta este enfoque parte de dos premisas básicas: todas las necesidades tienen la misma importancia y todas son básicas, es decir, fundamentales para reflejar la pobreza.

Las limitaciones en cuanto al carácter dicotómico del método y la imposibilidad de medir la profundidad de la pobreza han llevado al desarrollo de nuevas metodologías de medición, entre las que se destaca el índice de pobreza crónica (IPC). Este indicador se propone asociar pobreza crónica con la alta probabilidad de haber sido pobre en los distintos escenarios del pasado. Se argumenta que la pobreza crónica así definida aproxima mejor a los hogares de alta vulnerabilidad que la típica caracterización en función de la insuficiencia de ingresos, o de un número limitado de atributos no monetarios (Gasparini, Gluzmann y Tornarolli, 2019).

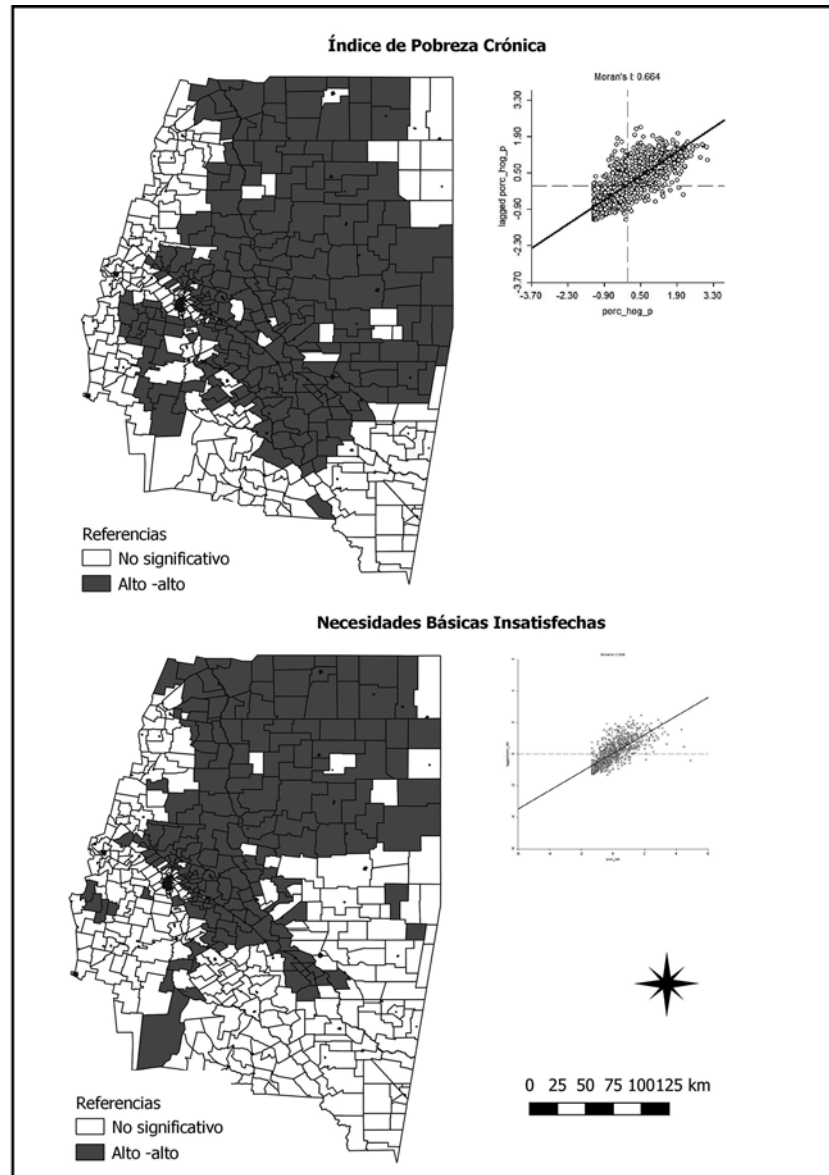
El mapa 1 presenta la distribución espacial de NBI e IPC en Santiago del Estero en 2010 a nivel radial.⁵ Se observan amplios sectores de extensión de la pobreza crónica en el área centro-oriental de Santiago del Estero. Por su parte, las NBI ofrecen una concentración mayor en el norte de la provincia. No obstante, para indagar sobre el patrón de concentración territorial, aplicamos el análisis de autocorrelación espacial, el cual permite detectar clústeres de agrupamiento a partir de los valores individuales y el de los departamentos en contacto o llamados también vecinos. El indicador que se utiliza es el índice I de Moran, el cual compara los valores de cada localización con los valores de las localizaciones vecinas. Los resultados de este índice varían del -1 al 1 representando las mayores correlaciones mínimas (máxima dispersión) y máximas (máxima concentración) respectivamente y donde el 0 significa un patrón espacial totalmente aleatorio. En ambos casos existe asociación espacial, en el caso del IPC el índice arroja un resultado de 0,663 y en las NBI de 0,584. El mapa 2 presenta en color oscuro los radios con valores altos y vecinos (concepto geográfico que remite a áreas contiguas a aquellas bajo análisis) con valores altos de cada indicador y sus rectas de regresión; a estos sectores los denominamos núcleos duros de la pobreza provincial.

5. Todos los mapas de este capítulo provienen del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Elaboración: Laboratorio de Cartografía Digital. Instituto Superior de Estudios Sociales (UNT-Conicet).

Mapa 1. Santiago del Estero. Distribución espacial de NBI e IPC en 2010 a nivel de radios censales



Mapa 2. Santiago del Estero. Clústeres según NBI e IPC en 2010 a nivel de radios censales



Idéntico análisis replicamos en el caso del aglomerado urbano Santiago del Estero-La Banda, ya que en la escala provincial quedan invisibilizados los sectores marginales de las principales ciudades. El mapa 3 presenta esta distribución. Observamos un patrón de marginalidad extendido, con importantes sectores periféricos dominados por las carencias. En este análisis la correlación espacial es menor que en el caso anterior, reflejando un valor de 0,417 en el IPC y de 0,285 en las NBI. Se distinguen con claridad en el ámbito del aglomerado un corredor de valores bajos de pobreza que se extiende desde el centro hacia el sur, mientras, simulando una estructura insular, hallamos tres núcleos duros de pobreza urbana en pequeños sectores del norte, este y oeste. En la ciudad de Santiago del Estero coincide con los barrios Libertad, John Kennedy, Industria, San Martín y Congreso (oeste), La Católica, Reconquista, 8 de Abril (este), y en la zona norte –pertenecientes a la ciudad de La Banda– quedan incluidos los barrios Agua y Energía, Los Lagos, Los Naranjos y La Fraternidad.

En este contexto de pobreza sabemos que la inseguridad alimentaria se desarrolla, crece y se consolida. Este problema alcanzaba umbrales preocupantes en Santiago del Estero, según distintas fuentes de información. Esto no constituye un hecho novedoso, Andrés Bolzán y Raúl Mercer (2009) han informado la alarmante cifra que alcanzaba este problema en la provincia en 2003, que abarcaba el 55,7% de la muestra (considerando el indicador “percepción de hambre grave”), lo cual muestra además su relación con condiciones estructurales de pobreza y su expresión en mayores prevalencias de niños con baja talla.

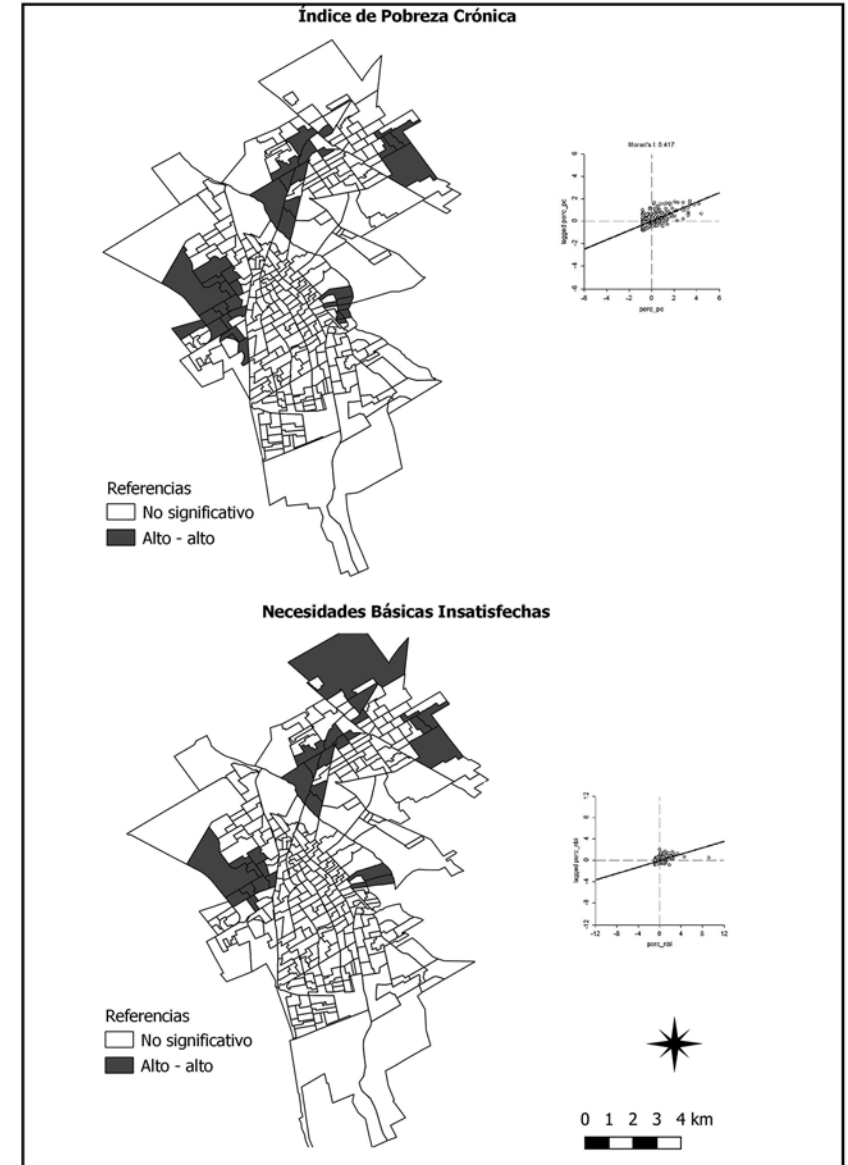
Esta condición, exacerbada a partir de la crisis socioeconómica argentina de 2001-2002, habría sido atenuada con distintos programas. Fernando Longhi *et al.* (2018) han estudiado la morbilidad por desnutrición en los niños argentinos y generado evidencias sobre estas mejoras mencionadas. No obstante, la llegada de la pandemia y las políticas de aislamiento social implementadas para afrontarla habrían agravado nuevamente este problema.

Un estudio reciente de Márquez y Salvia (2019) permitió estimar el riesgo de inseguridad alimentaria a nivel de radios censales en 2010. El mapa 5 exhibe dicha distribución en el caso de la provincia de Santiago del Estero. Se observa la concentración de los núcleos de mayor criticidad en los sectores marginales del aglomerado que ya se han identificado como núcleos de pobreza. En el interior de la provincia se destaca también la coincidencia espacial entre áreas de pobreza y riesgo crítico-alto de inseguridad alimentaria. Sobre estas áreas de criticidad se seleccionaron los comedores sobre los que luego se aplicó el instrumento de la entrevista.

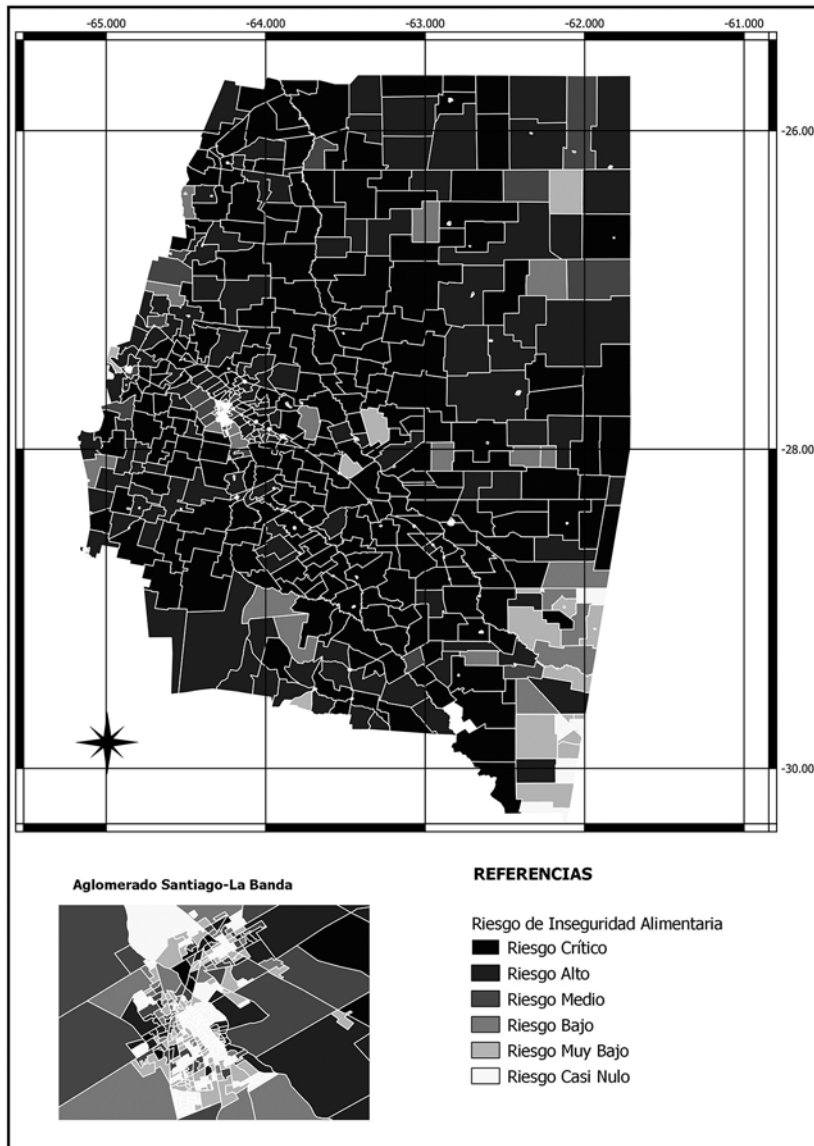
Mapa 3. Aglomerado Santiago del Estero-La Banda. Distribución espacial de NBI e IPC en 2010 a nivel de radios censales



Mapa 4. Aglomerado Santiago del Estero-La Banda. Clústeres según NBI e IPC en 2010 a nivel de radios censales



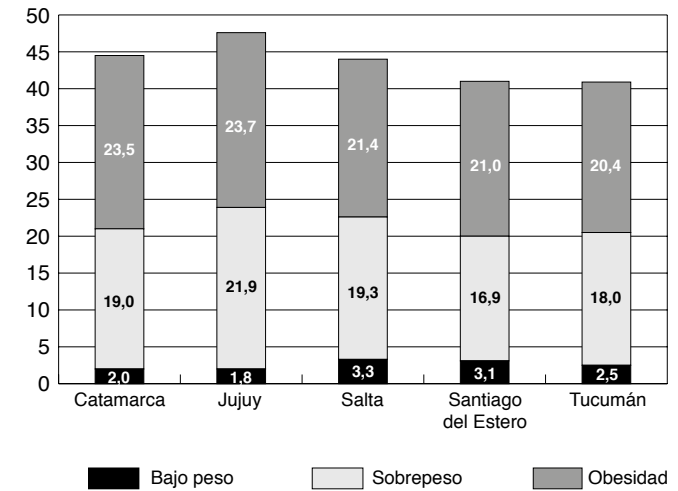
**Mapa 5. Provincia de Santiago del Estero.
Riesgo de inseguridad alimentaria (2010)**



Comedores comunitarios y malnutrición infantil

Usando las bases del Isepci reseñadas en un apartado anterior se analizó el estado nutricional de niñas y niños asistentes a comedores comunitarios. Podemos observar que durante la irrupción de la pandemia en Santiago del Estero, la malnutrición afectó al 40,9% de las niñas y los niños asistentes a comedores comunitarios. Comparativamente con el resto de provincias del NOA, los registros santiagueños se hallan en el extremo más bajo, el cual alcanza su punto más alto en Jujuy con el 47,5% de niños malnutridos (ver gráfico).

Provincias del NOA. Prevalencias de bajo peso, sobrepeso y obesidad en niñas y niños asistentes a comedores comunitarios. 2020-2021



Fuente: elaboración propia con base en el relevamiento anual del Isepci.

Un breve examen al interior de la malnutrición permite identificar otras particularidades del fenómeno. Los indicadores de bajo peso y baja talla para la edad, relacionados con situaciones estructurales de carencias, han perdido protagonismo en detrimento del sobrepeso y la obesidad. El gráfico permite detectar las diferencias en el estado nutricional entre las provincias del NOA, destacando el caso santiagueño como uno de los menos problemáticos en el contexto regional. Paralelamente, la comparación con los registros nacionales coloca a Santiago del Estero también en

una situación beneficiosa, ya que en todos los indicadores considerados exhibe menores prevalencias que las nacionales. Sin embargo, más allá de lo positivo del examen comparativo, se destaca que las prevalencias son en extremo altas; que la malnutrición afecte a cuatro de cada diez niñas y niños evidencia una situación en extremo preocupante, que se agudiza incluso en algunas provincias de manera más acuciante. Asimismo, en un contexto de aislamiento, confinamiento, exceso de uso de pantallas, sedentarismo, precarización laboral y pérdida del empleo informal junto al aumento de los precios de los alimentos (sobre todo los de mayor calidad nutricional), estas prevalencias podrían incrementarse sustancialmente, con todos los riesgos en la salud que esto implica, tanto en problemáticas actuales como futuras.⁶

Comedores infantiles comunitarios: percepción de impactos luego de la pandemia por COVID-19

A partir de la aplicación de entrevistas en profundidad a referentes de comedores comunitarios en zonas de alto riesgo de inseguridad alimentaria buscamos conocer las percepciones respecto del impacto que la pandemia tuvo en tres dimensiones de la vida cotidiana: las actividades alimentarias, las actividades extraalimentarias y el consumo problemático de sustancias. El abordaje de estas dimensiones aportó elementos que, sistematizados, permitieron una aproximación a las acciones que los espacios de alimentación desplegaron para hacer frente a la crisis profundizada por las medidas de confinamiento. Así, profundizamos la comprensión sobre las modificaciones experimentadas a nivel de rutinas, expectativas y volumen de la demanda por asistir.

El trabajo con los referentes puso en evidencia cómo la asistencia estatal llega al territorio de manera heterogénea, aumentando la incertidumbre entre quienes tienen la tarea de asistir con alimentos. En este sentido, el reconocimiento de otros aspectos tales como las condiciones sociolaborales y ambientales del barrio, la forma que se financian y organizan los espacios de alimentación, así como las características de la

6. Existen notorias evidencias respecto del impacto de la obesidad en la salud actual y futura. Esta condición resulta determinante en la salud del adulto, ya que, junto a la acumulación de tejido adiposo abdominal, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades vasculares y coronarias e hígado graso, entre otras (Barker, 2007; Velázquez-Bautista et al., 2017; Soydan, Akici y Coskun, 2021).

administración y los criterios para definir el tipo de alimentos que será ofrecido, aportaron a la comprensión sobre la dinámica y alcance que asume la problemática del hambre.

Si a nosotros nos daría los recursos, si el gobierno nos daría los recursos se lo haría al comedor de lunes a sábado. Pero es imposible sostenerlo. Por qué, porque nosotros estamos sosteniendo tres merenderos. (I. y M., Mocase, merendero en zona rural, Monte Quemado)

Interrogantes como “¿cuánta gente asistirá mañana?”, “¿tendremos comida suficiente?” o “¿cómo distribuir lo que se tiene para que alcance para más personas?” son claras manifestaciones de lo señalado y de la calidad y el alcance de los alimentos ofrecidos.

Ahora bien, la variación en la asistencia no solo depende del volumen y tipo de alimentos ofrecidos. Al evaluar la capacidad de respuesta y las posibilidades de sostener ciertas acciones con despliegue territorial, es crucial la vinculación con otros niveles de gestión (provincial, municipal, nacional), así como la articulación con otros actores y organizaciones sociales.

En un primer momento ha sido eso, ofrecer lo que teníamos para dar y a partir de eso empezar a escuchar, escuchar cuáles son las necesidades sentidas del barrio, porque como te decía solo había un centro vecinal que funcionaba poco y nada. Entonces a través de las articulaciones, que en primera medida fue el centro vecinal, con la Iglesia evangélica que estaba cerca, hemos podido empezar a darle forma al plan y llevarlo adelante. (G., Cáritas, merendero, La Banda)

En otros casos, como el del Mocase, fue clave la producción de alimentos para el autoconsumo, como por ejemplo la cría de animales y las huertas comunitarias.

En la Juana Azurduy tenemos la huerta comunitaria lo cual se está destinado a que se coseche ahí los alimentos necesarios para lo que es la cocina. (J., Mocase, merendero en zona rural, Monte Quemado)

Las entrevistas también dejaron evidencia clara respecto de las características socioeconómicas de las familias demandantes de alimentos. En todos los casos están caracterizadas por la alta vulnerabilidad, su inserción

precaria y a veces fugaz en la estructura socioproductiva y el impacto que la pandemia ha ocasionado ante tal cuadro estructural.

Mira, te comento, lo que más o menos conozco de mi barrio, te puedo decir que algunos son albañiles, cartoneros, y otros venden cositas dulces o saladas en la calle, también los vendedores esos que andan en el colectivo [ambulantes], y mucha gente depende del salario universal, eso es lo que te puedo decir. (S., comedor Mi Solcito, Barrio Industria, ciudad de Santiago del Estero)

Se profundiza a continuación sobre tres ejes que vertebraron el análisis cualitativo: los impactos de la pandemia en aspectos alimentarios, en aspectos extraalimentarios y en los consumos problemáticos.

Impactos en actividades alimentarias

Conforme se profundizaron las medidas restrictivas que buscaban contener la escalada de contagios, numerosos espacios de alimentación vieron comprometida la posibilidad de continuar con su trabajo. Algunos tuvieron que cerrar, mientras que otros que no cumplían la función de asistir con alimentos debieron incorporarla. Al ritmo en que avanzaba la pandemia, las dinámicas y formas de acercar alimentos a la población debieron ser repensadas para sostener el vínculo comunitario y asistir a las familias en las cuales los jefes de hogar estaban impedidos para realizar changas o habían perdido la fuente de ingresos.

El nuevo escenario en los espacios de alimentación se caracterizó por lo siguiente: 1) una mayor demanda alimentaria; 2) la imposibilidad de asistir con alimentos todos los días de la semana; 3) la implementación de un sistema de viandas para evitar que la gente permanezca en los comedores; 4) la incorporación de la familia como demandante de alimentos, en un momento en el cual lo ofrecido podía ser la única comida del día; 5) las variaciones en el tipo de alimentos ofrecidos, por los costos o por faltantes en los comercios; 6) la suspensión de la ayuda recibida de otros organismos del Estado y de particulares; 7) el cambio de estrategias de trabajo territorial y para la gestión de insumos, y 8) la asistencia sobre problemas profundizados o agravados producto de la discontinuidad en el ingreso de los hogares, las condiciones habitacionales y de las relaciones intrafamiliares en las que se transitó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

Antes se hacía una sola ollita, y ahora estamos en dos olladas de cien litros. Y a veces quedamos cortos con la comida [...] cada día se van sumando más personas. Llega gente a querer anotarse, viene muchísima gente que no ha retirado antes y vienen para que la anoten, para que puedan retirar también, porque hay mucha necesidad [...] Nos organizamos como por rubros, nosotros como organización pudimos gestionar a través de Desarrollo Social todo lo que es los secos: harina, fideo, arroz, la grasa, la levadura, el azúcar, la leche y el cacao. ¿Qué pasa? Lo más caro de todo es la leche. Entonces tomamos alguna estrategia como comprar las bolsas grandes, discutimos que era preferible hacer dos tazas de leche y no una de mate cocido. Porque aquí en el hospital, que se repartía leche, dejaron de repartir leche en pandemia. (W., J. y L., Mocase, merendero, zona rural Quimili)

Los alimentos los conseguimos en distribuidores mayoristas. Aquí hay como un fondo destinado a los tres merenderos. Los manejamos desde el movimiento, con otra compañera nos encargamos de ir a buscar a la distribuidora, y ellos se encargan de llevar todo lo que sacamos. Siempre sacamos a mayoristas por precios, y la carne, eh, se consigue con los compañeros del campo que son del movimiento. Conseguimos algún animal para que así nos sea más factible, no sea mucho, por el precio digamos. Y las donaciones del campo de los compañeros también llegan y van destinadas a los comedores. Los precios aumentaron mucho. Por ese mismo motivo se dona carne [...] nosotros se hemos puesto a hacer números cuando comenzaron a subir los precios, y hemos llegado a la conclusión de que por ejemplo hacer leche nos salía muy caro. Hacer un estofado te salía más barato que hacer leche para la cantidad de niños que estábamos repartiendo [...] la cajita de leche de 800 gramos, la más económica antes de que arrancara la pandemia salía 400 pesos y hoy está cerca de 1.000 pesos a 800. (I. y M., Mocase, merendero en zona rural, Monte Quemado)

El aumento de precios ante recursos limitados no solo condicionó la cantidad de porciones y frecuencia con la que se ofrecían los alimentos, sino que también demandó una modificación sobre la composición del plato que se ofrecía. La calidad cedió lugar a los alimentos rendidores y llenadores, lo cual se relaciona con el crecimiento de la obesidad reseñado anteriormente.

Antes se hacían masas dulces, se hacían como otras variedades de comida, hacíamos la pizza. Nos daba para comprar queso con dulce [...] pero la realidad es que se dejó de hacer eso para hacer lo básico por lo menos, se dejó de hacer la especialidad (si querés) para que alcance para más personas. Ahora ya no compramos la fruta, porque no alcanza, hemos quedado solo con la verdura. Compramos verdura para el mes, cinco bolsas de papa, tres de cebolla, cuatro cajones de morrón, dos de tomate y dos bolsas de zanahoria. Antes, siempre comprábamos variedad, banana, manzana, pera, naranja, mandarina. Ahora ya no se puede. Son muchas familias. Ya con dos cajones de naranja no hacemos nada. Le dábamos solo a los chicos para que alcance al menos para los chicos, pero después no alcanzó ni para los chicos porque la fruta fue subiendo cada día más. Hemos descartado el tema de la fruta, para aumentar la verdura y que alcance para cocinar en dos ollas, para que alcance más para las personas que venían a retirar. (W., J. y L, Mocase, merendero en zona rural Quimili)

En tal contexto se reconoce la necesidad de brindar alimentos de mejor calidad nutricional, es decir, existe conciencia respecto del tipo de alimentos ofrecidos y su impacto nutricional. Sin embargo, los referentes hallan limitaciones de alto grado entre los alimentos deseados y los alimentos posibles.

Además, nosotros no podemos darle las comidas que son necesarias, como las carnes o verduras, nosotros dependemos mucho de las donaciones y a veces no siempre tenemos eso. Yo sé que son necesarios esos alimentos, porque hace tiempo los del ministerio nos daban charlas de cómo hacer las comidas, con eso de las vitaminas, el potasio, pero bueno uno siempre quiere tantas cosas, pero no se puede. (A., comedor barrio Bosco III, ciudad de Santiago del Estero)

Algunos de los alimentos que no pueden faltar y que se destacan en las distintas entrevistas son la leche (en sus distintas formas de servir), el arroz y los fideos. Si bien se menciona el hecho de que antes se hacía hincapié en la importancia del esquema alimentario solicitado por algún organismo provincial, queda claro que estas metas nutricionales quedaron truncas con el inicio de la pandemia, por un lado, por la cantidad de niñas, niños y adultos recurrentes a los comedores, pero también por la no disponibilidad de algunos alimentos esenciales como las frutas y verduras. Esto se trasladó además a los platos preferidos por niñas o niños, las milanesas con puré o la pizza, que otrora podían, eventualmente,

formar parte del menú, y que dieron lugar a los guisos (de fideos o arroz) y la polenta como platos casi exclusivos de los menús ofrecidos.

Finalmente, se destaca también la importancia de estos espacios como oferentes de alimentos no solo para niñas y niños, sino que los impactos de la pandemia obligaron a asistir alimentariamente a personas adultas que sufrieron situaciones de abandono.

Impactos en actividades extraalimentarias

Los comedores son espacios híbridos en los que confluyen las políticas sociales, los repertorios organizativos populares y las estrategias familiares de sobrevivencia (Pereyra Cousiño, 2016). La preparación de alimentos es colectiva, y eso requiere una organización que involucra a diversos actores, y que a la vez otorga identidad en el territorio. Es precisamente ese anclaje territorial el que permite a estos espacios desarrollar otras actividades a partir de las cuales se constituyen en ámbitos de sociabilidad y de interacción social. Son espacios que, muchas veces, rompen con el aislamiento y los límites que impone el contexto doméstico vulnerable, para extender la sociabilidad hacia otras esferas, principalmente en el caso de niñas, niños y madres (Pereyra Cousiño, 2016). Para las mujeres, los espacios de alimentación y la vinculación con diversos tipos de organizaciones sociales fue una condición de posibilidad para dejar atrás el aislamiento social al que muchas estaban sometidas. Con el confinamiento diversas actividades se vieron discontinuadas, situación que impactó diferencialmente según la realidad social de las familias. Muchos de esos espacios, cerrados abruptamente, ofrecían juegos, actividades de apoyo escolar, la oración (en el caso de comedores de gestión religiosa), el sostenimiento de las huertas, o talleres específicos como pintura y tejido para madres, a la vez que catalizaban las denuncias por violencia familiar y otras problemáticas vivenciadas en la cotidianidad del barrio. La imposibilidad de interactuar con otras mujeres, de contar con un espacio para la reflexión y el abordaje de situaciones individuales, grupales o incluso comunitarias, tal vez haya sido lo más difícil de sobrellevar para las familias y los responsables de comedores.

Te llaman por cuestiones de violencia de género, te llaman por abuso sexual infantil. El otro día conocimos a una señora que empezó a ir al merendero, porque el marido cayó en depresión, porque se enteraron en la Pascua que un pariente había abusado

de sus cuatro hijos. (W., J. y L., Mocase, merendero en zona rural Quimili)

Hay muchos problemas, de violencia de género, sobre todo en los niños, en las madres. Se ha profundizado mucho en el barrio. (I. y M., Mocase, merendero en zona rural, Monte Quemado)

Se acompaña procesos de violencia intrafamiliar, procesos judicializados porque, así como tienen hijos que hoy tienen diecisiete años, algunos tienen siete años. A familias de hermanos más grandes que delinquirían, había que tener contacto con derechos humanos y se empezó a trabajar fuertemente las cuestiones personales de cada familia [...] Se ha profundizado, hoy sobre todo con la cuarentena, se comparte tanto tiempo y la gente no estaba muy acostumbrada, y la verdad es que si había alguna cuestión, se la manejaba porque uno anda en la calle todo el día, va y viene. Y aquí es como que ha habido tiempo de darle lugar al estrés emocional y eso muchas veces termina en el enojo. (G., Cáritas, merendero, La Banda)

Otra situación señalada por los referentes fue la pérdida de las rutinas, principalmente las que marcaba la asistencia a la escuela, así como compartir los alimentos en los espacios comunitarios. Esos lazos que se reforzaban cotidianamente, si bien no desaparecieron, sufrieron modificaciones conforme los comedores y merenderos tuvieron que alterar sus dinámicas de funcionamiento. En muchos casos el hecho de no contar con tecnología e internet, así como la baja escolarización de los padres, presentó nuevas dificultades para niñas y niños y ello repercutió desfavorablemente en los desempeños educativos.

La realidad es que la escuela mal que mal, la escuela primaria, secundaria, el ir, vos tenés una maestra, una docente, que va identificando con me tengo que acostar temprano, tengo que hacer tal cosa. Pero al no haber escuela, al no haber nada... encima una me decía no, ni siquiera tiene la posibilidad de que el papá o la mamá lo ayude porque no tiene dispositivo o porque a veces no se entiende la tarea y sumado con la violencia, y sumado a... es una situación muy complicada. (W., J. y L., Mocase, merendero, zona rural Quimili)

Finalmente, el trabajo social que implicó el abordaje extraalimentario de los comedores incluyó la recolección y entrega de ropa y calzado destinado no solo para niñas y niños, sino en muchos casos también a

las personas adultas que forman parte de su círculo familiar (algunas de estas personas son adultos mayores en situación de abandono).

Consumos problemáticos

Los problemas de drogas y alcohol son altos, y en muchos casos derivaron en un aumento de las violencias intrafamiliares. Algunos de los referentes señalaron que la pérdida de la cotidianidad, la imposibilidad de dar continuidad a las actividades destinadas –principalmente a los adolescentes y jóvenes– tuvo un impacto negativo en el uso del tiempo libre.

Y bueno la escuela tenemos actividades recreativas, como danzas, fútbol, esas cosas y se han tenido que suspender, y en realidad iban muchos chicos del barrio. Iban muchos chicos del barrio, y en vez de andar en la calle iban a pasar el tiempo ahí y ahora no se puede, ocupaban ese tiempo en cosas recreativas, en socializar. Y ahora como no están estas actividades, ahora andan en otras cosas. (I. y M., Mocase, merendero en zona rural, Monte Quemado)

El consumo ha aumentado un montón, también aumentaron mucho los robos. Nosotros cuando empezamos teníamos el inconveniente de que los chicos de las mismas mamás que ayudaban en el merendero robaban en el barrio, se robaban entre ellos, a través de todo el trabajo que hemos venido haciendo y del plan este, de que la familia se una para hacer trabajo mancomunadamente, bueno hemos conseguido que los chicos dejen de robar en el barrio. (G., Cáritas, merendero, La Banda)

Algunos relevamientos han dado cuenta de que el aumento del consumo de alcohol durante la pandemia ronda el 45% y que se triplicó el número de personas que consumen bebidas alcohólicas todos los días (Camarotti et al., 2020). Destacan además que durante la cuarentena crecieron los dos polos de la frecuencia de consumo: se duplicó el número de quienes no toman bebidas alcohólicas y se triplicó la cantidad de personas que toma todos los días. Si bien este relevamiento destaca tal condición en el Área Metropolitana de Buenos Aires, las entrevistas realizadas, sin ser exhaustivas en la definición de la magnitud del crecimiento, se orientan en la misma dirección. En el plano latinoamericano los resultados son similares también (García-Cerde et al., 2021).

Queda claro que ante un evento como la pandemia los espacios de alimentación se vieron superados, no solo por el incremento de la demanda de alimentos, sino también por el agravamiento de las problemáticas sociales. En contextos de extrema desigualdad social las medidas adoptadas por la Nación y las provincias para ralentizar los contagios no solo impactaron en la posibilidad de comer todos los días, sino que también dislocaron la continuidad de la socialización de NNVA por fuera del hogar. Se constituyeron en una barrera para el acceso a la educación y la preservación de la salud biopsicosocial de las familias, incrementándose el consumo problemático de sustancias y deteriorándose la vinculación en los espacios tradicionales de socialización.

Consideraciones finales

En esta contribución, que se enmarca dentro del conjunto de aportes que buscan analizar los impactos de la pandemia en la salud nutricional de la infancia, se puso en el centro del análisis a los comedores comunitarios como instituciones que podrían contribuir a paliar los problemas derivados de la inseguridad alimentaria. En efecto, los comedores comunitarios como espacios de alimentación alternativa podrían haber adquirido un protagonismo especial, en el contexto de una provincia pobre como Santiago del Estero, con antecedentes notorios de problemas de desnutrición infantil, alto riesgo de inseguridad alimentaria de su población (principalmente infantil) agravados en el contexto crítico de impactos por la pandemia de COVID-19 y la pandemia de obesidad infantil.

Bajo esta premisa y con un abordaje que articuló métodos cuantitativos, cartográficos y cualitativos se estudió la manifestación de este problema social.

Desde una mirada cuantitativa, se distinguió la persistencia y extensión territorial del riesgo de padecer inseguridad alimentaria en la población santiagueña; con el mismo enfoque y mediante el uso de estadísticas relevadas por el Isepci –luego de nueve meses de la irrupción de la pandemia– se pudieron identificar algunas prevalencias relacionadas con el estado nutricional infantil de la niñez asistente a comedores comunitarios. Si bien son datos derivados de una encuesta, permiten inferir con gran precisión –fundada en el valor de la muestra que constituye el estudio– el nivel, las características y la distribución espacial que asume el problema de la malnutrición infantil en la provincia.

El análisis destacó la existencia de inseguridad alimentaria inserta en núcleos duros de pobreza, los cuales fueron identificados y corroborados a partir de dos métodos de medición de la pobreza. Se destaca así que la inseguridad alimentaria crece y se desarrolla en contextos de pobreza, y que su presencia en la provincia se posiciona como un problema estructural tanto en la prepandemia como luego de la irrupción de esta. Las implicancias de esta situación no son menores, ya que derivó en la implementación de estrategias familiares desarrolladas para enfrentar el problema. Fueron estrategias recurrentes la supresión de alimentos por parte de algunos integrantes de la familia, el uso de alimentos más rendidores, llenadores y saciadores y la asistencia a los comedores y merenderos del barrio, permitiendo esta última destinar el dinero de la Tarjeta Alimentar a la compra de otros artículos del hogar, de ropa de los niños o la carga de la tarjeta de celular para obtener datos móviles que les permitieran seguir las clases por las plataformas virtuales.

Una situación muy similar operó en el universo de comedores comunitario: la disminución de las partidas y donaciones, el aumento continuo del precio de los alimentos e insumos necesarios para prepararlos, en un contexto de constante empobrecimiento, inflación y crecimiento de la demanda alimentaria, obligaron a tomar decisiones tendientes al abaratamiento de los menús. Esto implicó la incorporación de alimentos ricos en grasas, harinas, azúcar y sal, mucho más baratos en el mercado, y la supresión de verduras y frutas, siendo en algunos casos hasta la carne reemplazada por menudos de pollo o embutidos. Es clara entonces la orientación obesogénica de la alimentación actual profundizada además por el confinamiento, los altos niveles de sedentarismo, la falta de actividad física y la elevada cantidad de horas frente a pantallas. Esto mostró asociación con las cifras de malnutrición infantil que el Isepci ha informado, donde cuatro de cada diez niños asistentes a comedores en la provincia presentan malnutrición.

En este contexto, se destaca la pérdida del principal rol de los comedores, no solo como oferentes de alimentos, sino como espacios de sociabilidad, de construcción de vínculos, de implementación de talleres educativos, tareas asistenciales, apoyo escolar y recreación. Las medidas de aislamiento suspendieron estas actividades y sumaron una nueva dificultad a las comunidades que ya enfrentaban problemas asociados con el consumo problemático de sustancias y la violencia doméstica. Esta transformación del comedor como agente de vinculación social a mero distribuidor de alimentos habría tenido efectos también en el lazo social comunitario.

Finalmente, el abordaje de las dimensiones “actividades alimentarias”, “actividades extraalimentarias” y “consumo problemático de sustancias”, como forma de aproximarnos y reconocer la cotidianidad de los espacios de alimentación, permitió advertir la convivencia de dos situaciones: por un lado la percepción del debilitamiento de los lazos sociales, devenido de la imposibilidad de compartir el espacio común del barrio y los espacios de alimentación y, por otro, el fortalecimiento de las redes de alcance territorial que permitieron asegurar la continuidad de la asistencia y acompañamiento de numerosas familias y niños.

El panorama futuro no se presenta alentador: al contexto obesogénico que se dispara (el cual presenta grandes riesgos para la salud física y emocional presente y futura) se agregan los impactos socioeconómicos de la pandemia, en términos de precarización laboral, empobrecimiento e inflación, los cuales generan todo el sustento para el agravamiento, aun mayor de esta condición, con nocivas consecuencias en la salud infantil.

Referencias bibliográficas

- AGUIRRE, P. (2010), “Una visión antropológica sobre el impacto de la pobreza y la globalización en la emergente epidemia de obesidad”, *Diabetes in Women* (1).
- (2016), “Precio de los alimentos y políticas alimentarias para un futuro posible”, en I. Tuñón, *Situación de la infancia a inicios del Bicentenario: un enfoque multidimensional y de derechos*, Buenos Aires, Barómetro de la Deuda Social de la Infancia.
- ÁLVAREZ, J. (2012), *Salud y nutrición infantil: equidad y determinantes sociales*, Mendoza, Universidad Maza.
- BARKER, D. J. (2007), “The origins of the developmental origins theory”, *Journal Internal Medicine*, 261.
- BARRERA-DUSSAN, N., E. P. FIERRO-PARRA, L. Y. PUENTES-FIERRO y J. A. RAMOS-CASTAÑEDA (2018), “Prevalencia y determinantes sociales de malnutrición en menores de cinco años afiliados al Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN) del área urbana del municipio de Palermo en Colombia, 2017”, *Universidad y Salud*, 20 (3).
- BERGEL SANCHÍS, M. L., M. F. CESANI y E. E. OYHENART (2017), “Malnutrición infantil e inseguridad alimentaria como expresión de las condiciones socioeconómicas familiares en Villaguay, Argentina, 2010-2012: un enfoque biocultural”, *Población y Salud en Mesoamérica*, 14 (2).
- BOLSI, A. y PAOLASSO, P. (2009), *Geografía de la pobreza en el Norte Grande Argentino*. San Miguel de Tucumán: PNUD- CONICET-UNT.
- BOLZÁN, A. y R. MERCER (2009), “Seguridad alimentaria y retardo crónico del crecimiento en niños pobres del norte argentino”, *Archivos Argentinos de Pediatría*, 107 (3).
- BONFIGLIO, J., A. SALVIA y J. VERA (2020), *Deterioro de las condiciones económicas de los hogares y desigualdades sociales en tiempos de pandemia*, informe técnico, Buenos Aires, Observatorio de la Deuda Social Argentina.
- CAMAROTTI, A. C., D. E. JONES, M. GÜELMAN, P. DULBECCO y S. L. CUNIAL (2020), *Cambios en los patrones de consumo de bebidas alcohólicas en la cuarentena por COVID-19: un estudio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Argentina)*, Córdoba, UNC.
- CASAS PATIÑO, D., F. C. GRIFALDO, A. R. TORRES y G. C. LANGRAVE (2021), “Análisis sociocrítico de los comedores comunitarios en el Estado de México”, *Interfaces Científicas. Saúde e Ambiente*, 8 (3).
- CORDERO, M. L. y M. F. CESANI (2021), “Magnitude and spatial distribution of food and nutrition security during the COVID-19 pandemic in Tucumán, Argentina”, *American Journal of Human Biology*, e23632.
- DEMONTE, F. (2016), “Un análisis de las políticas sociales alimentarias en la Argentina reciente, 2001-2008”, *Población y Sociedad*, 23 (1).
- FAO (2000), *El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo*, Roma.
- FAO, FIDA, OPS, WFP y Unicef (2020), *Panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe 2020*, Santiago de Chile.
- FERES, J., MANCERO, X. (2001), *El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina*, Santiago de Chile, CEPAL.
- FISZBEIN, A. y P. I. GIOVAGNOLI (2004), “Hambre en la Argentina”, *Desarrollo Económico*, 43 (172).
- FREI-HERRMANN, K. (2020), “Los comedores populares argentinos en tiempos del COVID-19: el rol de los comedores durante la pandemia, el sistema alimentario y la acción del gobierno argentino”, *Independent Study Project (ISP) Collection.*, 3297. Disponible en https://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4321&context=isp_collection
- GAMEREN, E. van y S. URBINA HINOJOSA (2018), “La doble carga de la malnutrición: la inseguridad alimentaria y el sobrepeso en México”, *Economía de la Salud en México*, Universidad de Monterrey / Universidad Autónoma de Nuevo León
- GARCÍA-CERDE, R., J. Y. VALENTE, I. SOHI, R. FALADE, Z. M. SÁNCHEZ y M. G. MONTEIRO (2021), “Alcohol use during the COVID-19 pandemic in Latin America and the Caribbean”, *Revista Panamericana de Salud Pública*, 45.
- GASPARINI, L., P. GLUZMANN y L. TORNAROLLI (2019), *Pobreza crónica en datos de corte transversal: estimaciones para Argentina*, Documento de trabajo N° 252. Buenos Aires, CEDLAS.
- IERULLO, M. (2013), “Prácticas de cuidado infantil en organizaciones comunitarias: los comedores comunitarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina”, *Revista Portularia* 13 (1), 59-65. España, Universidad de Huelva

INDEC (2021), *Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos*, Buenos Aires.

ISEPCI (2021), *Informe de resultados del indicador barrial de situación nutricional. Informe primer semestre 2021*, Buenos Aires.

LEÓN, A., R. MARTÍNEZ, E. ESPÍNDOLA y A. SCHEJTMAN (2004), *Pobreza, hambre y seguridad alimentaria en Centroamérica y Panamá*, Santiago de Chile, CEPAL.

LONGHI, F., A. GÓMEZ, M. E. ZAPATA, P. PAOLASSO, F. OLMOS y S. R. MARGARIDO (2018), “La desnutrición en la niñez argentina en los primeros años del siglo XXI: un abordaje cuantitativo”, *Salud Colectiva*, 14.

LUNA MONTAÑO, R. (2020), “Asociación entre la inseguridad alimentaria y la doble carga de malnutrición: revisión sistemática”, tesis de maestría, Ciudad de México, Universidad Iberoamericana, Departamento de Salud.

MÁRQUEZ, A. y A. SALVIA (2017), *Informe técnico: estimación y georreferenciación de la probabilidad de padecer inseguridad alimentaria; metodología y resultados para el total país [en línea]. Informes de consultorías. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2017. Disponible en: <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9077>* Buenos Aires.

– (2019), *Riesgo de inseguridad alimentaria*, CIUDAD, EDITORIAL.

MINISTERIO DE SALUD (2007), *Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Documento de Resultados 2007*. Buenos Aires.

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (2019). *Resumen Ejecutivo II. Encuesta Nacional de Nutrición y Salud*, Buenos Aires.

PAZ, R. y C. JARA (2012), “El campesino en Santiago del Estero, Argentina: la pobreza de un sector que se resiste a desaparecer, 1988-2002”, *Ager. Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural / Journal of Depopulation and Rural Development Studies*, 12.

PEREYRA COUSIÑO, B. L. (2016), “Los significados del comedor popular: entre los intereses estratégicos y prácticos”. IV Jornadas del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, Ensenada, Argentina.

ROSSO, M. A., M. I. WICKY, M. C. NESSIER y R. MEYER (2015), “Inseguridad alimentaria en la ciudad de Santa Fe: percepción de los ciudadanos”, *Salud Colectiva*, 11.

SALVIA, A. (2010), “Desigualdad económica y reformas estructurales en Argentina: 1990-1994”, tesis doctoral, México, El Colegio de México.

–, I. TUÑÓN y B. MUSANTE (2012)., *La inseguridad alimentaria en la Argentina: hogares urbanos. Año 2011*, Buenos Aires, Observatorio de la Deuda Social Argentina-UCA.

SANTARSIERO, L. H. (2013), “Los comedores comunitarios como fenómeno social, político y alimentario en la Argentina de los últimos treinta años: una guía práctica para su comprensión”, *Cuestiones de Sociología*, 9.

SEN, A. K. (1997), “From income inequality to economic inequality”, *Southern Economic Journal*, 64 (2).

– (2000), *Desarrollo y libertad*, Buenos Aires, Editorial Planeta.

SORDINI, M. V. (2014), “Los comedores comunitarios y la emergencia contra el hambre”, VIII Jornadas de Sociología, 3-5 de diciembre, Ensenada, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de Sociología.

SOYDAN, L., N. AKICI y Y. COSKUN (2021), “Asociación entre el espesor de la grasa subcutánea abdominal y la esteatosis hepática, las enzimas hepáticas y los lípidos séricos en niños obesos”, *Archivos Argentinos de Pediatría*, 119 (2).

TUÑÓN, I. (2011), *Situación de la infancia a inicios del Bicentenario: un enfoque multidimensional y de derechos*, Buenos Aires, UCA.

VELÁZQUEZ-BAUTISTA, M., J. J. LÓPEZ-SANDOVAL, M. GONZÁLEZ-HITA, E. VÁZQUEZ-VALLS, I. Z. CABRERA-VALENCIA y B. M. TORRES-MENDOZA (2017), “Association of metabolic syndrome with low birth weight, intake of high-calorie diets and acanthosis nigricans in children and adolescents with overweight and obesity”, *Endocrinología, Diabetes y Nutrición*, 64 (1).